

Coyhaique, a veintidós de abril de dos mil veinticuatro.

VISTOS:

En lo principal de presentación de fecha 29 de diciembre de 2023, comparece don Renato David Gómez Bascuñán, enfermero, domiciliado en Kilometro N°2 camino a Balmaceda de la comuna de Coyhaique, quien deduce recurso de protección en contra Universidad de Aysén, representada legalmente por su rector, don Enrique Urra Coloma, ingeniero civil informático, ambos domiciliados en calle Eusebio Lillo n°667, Coyhaique, Región de Aysén, por la dictación Decreto Exento N°121418/952/2023, que no renueva su contrata para el año 2024 y que conculca las garantías del artículo 19 N° 2, 16 y 24 de la Constitución Política de la República, solicitando, en definitiva: “a) *se deje sin efecto el Decreto Exento RA N° 121418/952/2023, registrado con fecha 30 de Noviembre de 2023, que dispone no renovación de contrata por parte de la Universidad de Aysén, acto seguido, se dicte un nuevo Decreto Universitario que prorrogue mi contrata para el año 2024, en los mismos términos que anteriores renovaciones.. b) Que, se ordene pagar las remuneraciones durante el lapso intermedio que media entre el efectivo cese de funciones (30.12.2023) y la fecha de reincorporación a la Universidad en virtud de su sentencia. c) toda otra medida que SS Illtma. estime necesarias en justicia establecer para el caso concreto. d) que se condene expresamente en costas a la recurrida.*” (SIC).

Que, con fecha 08 de febrero de 2024, doña Daniela Martínez Martínez, abogada, en representación de la recurrida, incorporó el informe requerido.



Con fecha 10 de abril de 2024 se ordenó traer los autos en relación, procediéndose a la vista del recurso el día 17 del mismo mes y año, concurriendo a estrados por la recurrente, el abogado Víctor Oyarzún Rodríguez y, por la parte recurrida, la abogada Tamara Oyarzo Hernández, quedando en estado de acuerdo.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, la recurrente expone en síntesis, que ingresó a la Universidad de Aysén el día 02 de enero de 2020, como docente, grado 10°, con una jornada de 44 horas semanales, de conformidad al Decreto Exento RA N°121418/162/2020. Expone que le correspondió articular y formular los programas disciplinares de las asignaturas del 4° año, además de otras formas de colaboración, como la formación de un curso para enfermeras o enfermeros de la región para enfrentar la pandemia, gestionar prácticas, entre otras.

Señala que, en julio del 2021, asume la jefatura de la carrera de Enfermería, mediante Decreto Universitario Exento 217/2021, la cual se extiende hasta abril del 2023, sin perjuicio de tener a cargo 5 asignaturas y realizar clases en otras, participando durante el año 2022 del proceso de acreditación de la Universidad, además de participar en la creación de diplomas de postítulo y adjudicarse un proyecto de innovación pedagógica. Complementa lo anteriormente expuesto enunciando otras funciones realizadas, tales dirección y coordinación de otros cursos.

Indica que, con fecha 30 de noviembre de 2023 es citado a una reunión en la que le informan que no se le renovara su contrata para el año 2024 y se le entrega el Decreto



Universitario N° 121418/952/2023 de fecha 29 de noviembre de 2023, que dispone la no renovación de ésta.

En cuanto al derecho, alega falta de motivo y motivación del acto administrativo que no renovó su contrata, citando para ello el artículo 3 y 41 inciso 4° de la 19.880, disponiendo este último que las resoluciones que dicte la administración del estado contendrán la decisión, que será fundada. Agrega el artículo 11 inciso 2° del mismo cuerpo legal, el que establece que los hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afecten los derechos de los particulares, sean que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio, así como aquellos que resuelven los recursos administrativos.

Por otro lado, refiere que la doctrina ha indicado que, en toda actuación, la administración pública debe actuar razonable, proporcionada y legalmente habilitada, por lo que la causa o motivo es un elemento que debe expresarse en toda clase de actos administrativos, que los motivos del acto pueden ser de derecho o de hecho y que, no habiendo un error de hecho, la resolución adolece de un vicio de abuso o exceso de poder y podrá ser tachada de arbitraria.

Se remite a los considerandos 8° y 9° Decreto Exento RA N°121418/951/2023, a propósito de los antecedentes para no renovar su contrata, los que dicen relación con un informe elaborado por la Comisión Nacional de Acreditación y la Superintendencia de Educación Superior, los que darían cuenta de irregularidades en las contrataciones, así como una sobre dotación.

Por lo que, para dar cumplimiento a lo anterior, la Universidad con fecha 28 de noviembre de 2023 dictó el DU



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: RBXPXNNXVMC

N°395 que aprueba la circular N°002/2023 sobre “Requerimiento de docencia directa y compromisos académicos departamento de ciencias naturales y tecnología, ciencias de la salud y ciencias sociales y humanidades” año académico 2024, indicando que, los académicos deben cumplir con un número mínimo de horas de docencia, expresando en su letra f: *“como criterio de calidad, se establece que los claustros académicos deben impartir al menos un 70% de las horas de docencia directa de cada carrera y en término generales del departamento”*, y que con fecha 29 de noviembre de 2023, se dicta el DU N°397 que *“aprueba criterios de no renovación académicos a contrata 2024”*, en el que se dispone que el Departamento de Salud debe reducir su dotación académica.

Transcribe los criterios, siendo éstos: Perfil idóneo para el cumplimiento de los criterios HDD; Alineación entre perfiles académicos y especialidades formativas (perfil de egreso); Inconsistencia del perfil académico con las líneas disciplinarias de los departamentos académicos y Antigüedad (no renovación de ingresos recientes).

Sobre el primer criterio, éste considera que el perfil académico (formación académica y experiencia docente) de las/los académicos no permite cumplir con las horas de docencia directa (HDD) requeridas por cada programa, transcribiendo el considerando 18° del acto que no prorroga su contrata que señala *“en cuanto su formación y orientación profesional en los servicios de salud del territorio, no es coherente con las horas de docencia directa requeridas por los programas de estudio de las carreras de pregrado del departamento”*.

Al efecto, reclama que el acto carece de una “razonabilidad” al no contener las consideraciones que se tuvieron



para no renovar su contrata, y que se le estaría vedando conocer adecuadamente los motivos. Expresa que de la lectura del acto todavía no se sabe cómo se adecua en el criterio o en los criterios que estableció la Universidad y que el acto no se basta a sí mismo, por lo que la recurrida no está cumpliendo un requisito de existencia del acto administrativo al no “motivar” el acto, simplemente se limita a indicar razones económicas que obligan a ajustar la dotación docente del departamento e indicar y copiar casi textual el criterio N°1 del DU N°387, produciendo una grave transgresión del principio de legalidad contenido en el artículo 6° y 7° de la Constitución.

Por otro lado, si bien reconoce que es necesaria la desvinculación de académicos en atención a la situación financiera de la recurrida, sostiene que el acto es discriminatorio, puesto que no sabe por qué fue seleccionado para ser desvinculado en comparación con los académicos que se quedan impartiendo clases en la Universidad, que tampoco no fue consultado si acaso podía cumplir con el 70% de la docencia directa.

Adiciona que, participó como académico en la última campaña para la elección de rector/a activamente a favor de Patricia Carrasco, quien compitió y perdió frente a Enrique Urra Coloma, actual Rector, por lo que estima que esto motivo su desvinculación.

Sobre la confianza legítima, se remite a jurisprudencia de la Contraloría General de la República y de la Excma. Corte Suprema, en la que se fija un plazo mínimo de 2 años para que ésta opere y que su infracción supone una vulneración a las garantías fundamentales, que en su caso entre su renovación del año 2020 hasta la renovación del 2023, han transcurrido 04



renovaciones en 4 años como académico en la Universidad, por lo que considera que le asiste la confianza legítima.

También aborda la desviación de poder, porque en su caso el verdadero motivo para desvincularlo es haber participado en una campaña de la competencia del actual Rector, por lo que el móvil sería una represalia.

Por lo anterior, acusa que por la acción arbitraria e ilegal de la Universidad recurrida se vulneran el artículo 19 n° 2 de la Constitución Política de la República, que consagra a igualdad ante la ley, al no motivarse el acto y al no dar razones de su desvinculación en relación a otros docentes, así como vulneración al numeral 24 en relación al 16 de la misma disposición, sobre el derecho de propiedad y libertad del trabajo, al privársele del trabajo que está incorporado en su patrimonio.

SEGUNDO: Que, evacuando el informe requerido, el recurrido solicita su rechazo en todas sus partes, con costas.

Inicia su descargo relatando la creación del organismo en el año 2015 y estado actual de la Universidad de Aysén, la cual atraviesa una crisis institucional debido a un financiamiento poco diversificado y sobredotación de personal, arriesgando la continuidad del proyecto educativo, por lo que frente a dicho escenario, en septiembre de 2023 asumió un nuevo gobierno universitario encabezado por el Rector Enrique Urrea Coloma, quien en su inicio tenía como objetivo de elaborar un plan de reorganización institucional, cuya implementación hiciera posible alcanzar la sustentabilidad financiera, sin que las medidas incidieran negativamente en la calidad y continuidad de los servicios.

Expone que, dentro de los antecedentes requeridos por el rector Urrea, para dar respuesta a la crisis financiera, se



encuentran los informes técnicos elaborados por las autoridades universitarias responsables de las 5 Direcciones previstas en organigrama institucional, los cuales dieron cuenta de la situación de su respectiva Dirección al 24 de noviembre de 2023, y presentaron una propuesta de la dotación mínima requerida para otorgar la cobertura indispensable para el cumplimiento de funciones prioritarias y una propuesta de gestión para asegurar el funcionamiento basal de la dirección.

Agrega que la Superintendencia de Educación Superior, en cumplimiento de la Ley 20.800, mediante Resolución Exenta N°35 de 27 de noviembre de 2023, formuló cargos a la Universidad de Aysén, y mediante Resolución Exenta N°10, de 04 de enero de 2024, que resuelve procedimiento Administrativo Instruido a la Universidad de Aysén, aplica la medida consistente en nombramiento de un Administrador Provisional, el que junto a su equipo y miembros de la Universidad se encuentran trabajando para adoptar una serie de medidas de optimización y racionalización de gastos para el año 2024.

Respecto de las alegaciones esgrimidas por don Renato David Gómez Bascuñán, refiere que el acto administrativo no es arbitrario ni ilegal, ya que las actuaciones de la Universidad se han ceñido al principio de legalidad que rige el actuar de los órganos públicos, sometiéndose, además, a los principios de eficiencia y eficacia y dando cabal cumplimiento al deber de motivación de los actos administrativos.

En ese sentido, expresa que el acto que dispuso la no renovación de la contrata de la recurrente se encuentra debidamente motivado ya que previo a la dictación del decreto impugnado, se promulgaron los Decretos Universitarios Exentos N°395/2023, que aprobó la Circular N°2-2023 que fijó



requerimientos mínimos de docencia para el año 2024; N°396/2023 que aprobó la Circular N°2, que imparte orientaciones para la planificación académica y, a partir de ambos se efectuó el cálculo de la dotación óptima de académicos por cada Departamento, que sustentaron los 4 criterios contenidos por el Decreto Universitario Exento N°397/2023, en virtud de los cuales se pusieron término a las contrataciones de nueve académicos.

Así, refiere que se consideraron criterios objetivos, entre ellos el cálculo de la denominada Jornada Completa Equivalente de los académicos de la Universidad, la docencia requerida para los planes de estudio de las 8 carreras impartidas, proyectando la dotación académica para el año 2024, por cada departamento. En el caso del Departamento de Ciencias de la Salud corresponde a 17 horas de Jornada Completa Equivalente para el Departamento de Ciencias de la Salud.

Que en el caso del actor, explica que la no renovación de su contrata tuvo como sustento inmediato el primer criterio contenido en el DUE 397-2023, esto es, el perfil académico del recurrente no le permite cumplir con las horas de docencia directa requeridas por cada programa, para el año 2024, de acuerdo con la circular N°2 de 2023, promulgada mediante Decreto Universitario N°395-2023 y la resolutive del acto administrativo precisa que la decisión se basa, adicionalmente en que la formación y orientación profesional en los servicios de salud del territorio del recurrente, no es coherente con las horas de docencia directa requeridas en los programas de estudio de las carreras de pregrado del Departamento de Ciencias de la Salud.

Por otro lado, sostiene que la no renovación de la contrata no es discriminatoria, puesto que en ningún caso se desconoce su trayectoria, sino que en la necesidad de ajustar la



dotación académica, considerando un mínimo de horas de docencia directa que deben impartir en un determinado período, y que, previo a la decisión hubo un análisis técnico de las funciones desempeñadas por el cuerpo académico, que finalmente implicó la no renovación de contrata de 9 académicos, entre ellos la actora, atendida la crisis financiera de la institución, agravada por la sobre dotación de personal de colaboración y académico. Expresa que la decisión fue adoptada por el Rector de la Universidad, en el ejercicio de las facultades y competencias legales que posee la investidura de su cargo y en lo que al decreto recurrido respecta, éste fue, tanto de forma como en su fondo, dictado conforme a las atribuciones que la ley contempla.

Sobre el principio de confianza legítima, refiere que no es absoluto, ya que exige un mínimo de condiciones señaladas de manera expresa y clara en los dictámenes del ente fiscalizador y, por lo mismo, no implica transformar la naturaleza de una contratación que -por mandato del legislador- es en sí misma temporal (de 1 de enero al 31 de diciembre de cada año), sino que, solo mandata a la Administración para los casos en que pretende cambiar su práctica debe hacerlo de manera fundada, como el caso del acto administrativo impugnado, el que se encuentra suficientemente fundado. Por lo que, añade, la expectativa de renovación de una contrata, en ningún caso viene a reformar lo dispuesto en el Estatuto Administrativo General y en la normativa interna universitaria, en lo concerniente a que los nombramientos a contrata expiran el 31 de diciembre de cada año, y que en el ámbito del derecho público no hay derechos adquiridos.

Finalmente, que no se configuraría ninguna violación de garantías constitucionales invocadas por la recurrente,



precisando que respecto de la libertad de trabajo, la acción cautelar de protección, solo ampara la libertad de contratación y elección de trabajo y no establece una suerte de inamovilidad como parece creer la actora. Por ello, tampoco se configura una vulneración de dicho derecho.

TERCERO: Que, se debe tener presente que el artículo 20 de la Constitución Política de la República establece que: *“El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, números 1º, 2º, 3º inciso quinto, 4º, 5º, 6º, 9º inciso final, 11º, 12º, 13º, 15º, 16º en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19º, 21º, 22º, 23º, 24º, y 25º podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes”*.

CUARTO: Que, como lo ha sostenido reiteradamente la Excm. Corte Suprema, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 antes transcrito, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.



QUINTO: Que, como aparece de su propia definición, es requisito *sine qua non* de esta acción cautelar, la existencia de un acto u omisión ilegal – es decir, contrario a la ley -, o arbitrario, - esto es, producto del mero capricho de quien lo comete - y que, como consecuencia del mismo afecte, una o más de las garantías preexistentes y protegidas por el constituyente, lo cual será fundamental para la decisión por parte del tribunal ante el cual se interpone el referido arbitrio.

Igualmente, este Recurso Constitucional solo tiene por objeto proteger derechos indubitados y que no constituyan una esperanza o mera expectativa de constituir un derecho, pues no es un juicio declarativo de derechos.

SEXTO: Que, con los antecedentes de la causa, apreciados de acuerdo a las reglas de la sana crítica, se pueden dar por establecidos los siguientes hechos:

1.- Que, don Renato David Gómez Bascuñán ingresó a la Universidad de Aysén el 02 de enero de 2020, como docente, grado 10°, con una jornada de 44 horas semanales en calidad de contrata, de conformidad al Decreto Exento RA N°121418/162/2020.

2.- Que, con fecha 14 de enero de 2021, por medio del Decreto Universitario Exento n° 121418/43/2021, se prorroga la contrata de don Renato Gómez Bascuñán desde el 01 de enero de 2021 al 31 de diciembre del mismo año.

3.- Que, con fecha 06 de julio de 2021, por medio del Decreto Universitario Exento n° 217/2021, se designa a don Renato David Gómez Bascuñán como jefe de la carrera de Enfermería, por un período de dos años.

4.- Que, con fecha 20 de enero de 2022, por medio del Decreto Universitario Exento n° 121418/25/2022, se prorroga la



contrata del recurrente desde el 01 de enero de 2022 al 31 de diciembre del mismo año y con fecha 30 de enero de 2023, por medio del Decreto Universitario Exento n° 121418/76/2023, se prorroga su contrata desde el 01 de enero de 2023 al 31 de diciembre del mismo año.

5.- Que, con fecha 27 de noviembre de 2023, mediante resolución 2023/FC/35 la Superintendencia de Educación Superior, se le formulan cargos a la Universidad de Aysén.

6.- Que, con fecha 28 de noviembre de 2023, por medio del Decreto Universitario Exento n°394/2023, se aprueban “Ajustes a la estructura organizacional de la Universidad de Aysén”.

7.- Que, con fecha 29 de noviembre de 2023, por medio por medio del Decreto Exento RA N° 121418/952/2023 se determina por la Universidad de Aysén la decisión de no prorrogar la contrata de la docente don Renato David Gómez Bascuñán, a contar del 01 de enero de 2024.

8.- Que, con fecha 04 de enero de 2024, mediante Resolución Exenta 2024-00010, la Superintendencia de Educación Superior resuelve el procedimiento administrativo iniciado contra la Universidad de Aysén, aplicándose la medida de designación de un administrador provisional.

SÉPTIMO: Que, el recurrente ha hecho consistir el acto arbitrario o ilegal, en síntesis, en la dictación del Decreto Exento RA N° 121418/952/2023, que determina no prorrogar su contrata para el año 2024, estimando que con ello se afectan las garantías contempladas en el artículo 19, números 2, 16 y 24, de la Constitución Política de la República, lo anterior pese a encontrarse protegida por el principio de confianza legítima.



OCTAVO: Que, se debe tener la normativa atingente, a saber: La letra c) del artículo 3, de la Ley 18.834, indica que: *“Empleo a contrata: Es aquél de carácter transitorio que se consulta en la dotación de una institución.”* El mismo texto legal determina en su artículo 10, en relación a la permanencia, que *“los empleos a contrata durarán, como máximo, sólo hasta el 31 de diciembre de cada año y los empleados que los sirvan expirarán en sus funciones en esa fecha, por el solo ministerio de la ley (...)”*; esto es, figura implícita la facultad de la autoridad para poner término a las funciones del empleado a contrata antes de la fecha indicada.

Por ello, se concluye que por tratarse de funcionarios públicos que ejercían sus labores a contrata, la característica principal es la transitoriedad en la prestación de los servicios, lo que trae como consecuencia que el funcionario público no sirve el cargo en propiedad, ni goza de estabilidad en el empleo, a diferencia de lo que ocurre en el caso de los funcionarios de planta.

NOVENO: Que, en tal sentido, como punto de partida se debe desentrañar la naturaleza jurídica del nexo que unía al recurrente con la Universidad de Aysén, la que no ha estado debatida, según se expresó, y que corresponde a un cargo “a contrata”, el que se encuentra regulado en la ley N°18.834, Estatuto Administrativo, norma que en su artículo 2 letra c) establece expresamente que el empleo a contrata es aquel de carácter transitorio, y, por tanto -a diferencia del cargo de planta- la contrata se encuentra definida por su duración siempre limitada en el tiempo, disposición que se encuentra refrendada en el artículo 5° del Decreto Universitario Afecto N° 9 de 2018, que



promulga el Reglamento del Personal de Colaboración de la institución.

DÉCIMO: Que, afianzado este criterio, la Contraloría General de la República ha construido el concepto de "confianza legítima" para resguardar a los servidores públicos ante la existencia de arbitrariedades en las desvinculaciones de funcionarios públicos. Es así como se exige una serie de requisitos que permitan entender que ha existido una confianza legítima y que el vínculo existente será renovado en el tiempo.

Acto seguido, la naturaleza transitoria de un vínculo a contrata no otorga "propiedad en el empleo" ni menos una "inamovilidad", dado que esta última es una prerrogativa de quienes integran una planta acogidos a la carrera funcionaria. Prerrogativas que no gozan los funcionarios a contrata, ya que, dada la transitoriedad de dicho régimen, no les aplica el régimen de la carrera funcionaria tal como se señala en los artículos 44 a 51 de la Ley N°18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

UNDÉCIMO: Que, además a este respecto, la Excelentísima Corte Suprema, con el objeto de asentar un criterio unificador, ha establecido que, el principio de confianza legítima opera después de cinco años, plazo éste que se estima prudente para que la Administración evalúe íntegramente no sólo el desempeño del funcionario sino que, además, estudie la necesidad de seguir contando con el cargo que sirve la persona. Todo ello viene a ser coherente con la política de renovación de contratas del personal del Poder Judicial, siendo un criterio sistemáticamente aplicado al interior de este poder del Estado, teniendo sustento en el Acta 19-2012, refundida por el Acta 191-2019, que establece una renovación automática de la designación



de los empleados que registren nombramientos en cargos a contrata anual por cinco períodos consecutivos y figuren en lista de méritos durante ese plazo. (CS. Sentencia 31 de marzo de 2023, recurso de protección 26.279-2023).

DUODÉCIMO: Que, es un hecho de la causa que el recurrente se encontraba vinculado a través de la modalidad “contrata” con la Universidad de Aysén, mediando renovaciones, desde 02 de enero del 2020 al 31 de diciembre del año 2023, de conformidad a los decretos RA N°121418/162/2020, 121418/43/2021, 121418/25/2022 y 121418/76/2023, de lo que se infiere que el recurrente se ha mantenido de manera continua e interrumpida en calidad de contrata por un lapso inferior a 5 años, plazo establecido por la reciente jurisprudencia la Excm. Corte Suprema para que opere la confianza legítima, no cumpliéndose este supuesto en el caso de marras.

DÉCIMO TERCERO: Que, en otro orden de ideas, tratándose en la especie, de la decisión de la Administración de no renovación de una contrata, ésta no requiere de fundamentación, ya que este tipo de vinculación expira de pleno derecho al 31 de diciembre de cada año, de acuerdo al artículo 10 de la Ley 18.834, sobre Estatuto Administrativo, no obstante, la Universidad de Aysén dio cumplimiento a la jurisprudencia administrativa aplicable en materia de no renovación del vínculo laboral del personal a contrata, en el caso del recurrente, por cuanto manifestó, mediante el singularizado acto administrativo, los fundamentos de hecho y de derecho que sustentaron la decisión objetada.

DÉCIMO CUARTO: Que, en consecuencia, dilucidado lo anterior, en cuanto a la eventual ilegalidad de la resolución en cuestión, no aparece discutido que la decisión se encuentra



dentro del marco de las atribuciones de la recurrida, habiéndose seguido, en su tramitación, el procedimiento fijado en la Ley 18.834, sobre Estatuto Administrativo, de modo que dicho acto no es ilegítimo o ilegal desde este punto de vista, ya que, se procedió por quien estaba facultado para hacerlo y en el marco de sus atribuciones legales.

Por otro lado, la decisión de no renovar los servicios del funcionario en cuestión no requería mayor fundamentación y pese a ello se han señalado los motivos o fundamentos del mismo en el acto administrativo que se impugna, explicitándose en los considerandos del mismo, razón por la cual se desestimaré el presente arbitrio como se declarará.

DÉCIMO QUINTO: Que, por las razones antes señaladas, tampoco se advierte una desviación de poder, ya que la Administración, en el ejercicio de la potestad de la que está investida, mediante los distintos actos administrativos dictados, entre ellos el que contiene la decisión de no renovar la contrata del actor, persigue un fin amparado por el ordenamiento jurídico y de interés público, como lo es, en este caso, la superación de la crisis financiera y la continuación del proyecto educativo, acto que por cierto se encuentra debidamente motivado, pese a no ser requerido, como ya se explicó.

DÉCIMO SEXTO: Que, tal como se consignó en el motivo Sexto, es un hecho de la causa, que el recurrente prestó servicios en la Universidad de Aysén desde el día 02 de enero de 2020, hasta el día 31 de diciembre de 2023, cuyo período resulta inferior a 5 años, no siendo procedente la aplicación del principio de “confianza legítima”, pues la extensión y naturaleza de las vinculaciones citadas, es decir, un período de desempeño inferior a cinco años, no permiten generar expectativa de la renovación de



la contrata para el año 2024, con lo cual el recurrente no puede, atendida la naturaleza del vínculo, pretender una estabilidad y permanencia en el empleo, más allá de lo que en derecho le corresponde y, por ende, la decisión de no renovar los servicios del funcionario en cuestión no requiere de fundamentación, y que pese a ello, en el caso de marras se han señalado los motivos o fundamentos del mismo en el acto administrativo que se impugna, explicitando estos motivos en los considerandos del mismo.

DÉCIMO SÉPTIMO: Que, en consecuencia, el acto impugnado, no resulta ser ilegal ni arbitrario, desde que no tiene el deber de invocar fundamentos para no perseverar en el vínculo para el período siguiente, desde que, por una parte, la contrata expiró de pleno derecho el 31 de diciembre de 2023 y de otra, el funcionario no se encuentra protegido por el principio de la confianza legítima, por haberse desempeñado funciones por un período inferior a cinco años.

Así las cosas, no se aprecia la acusada afectación de la igualdad ante la ley, en su modalidad de discriminación arbitraria, por haberse producido la desvinculación del docente en ejercicio de la potestad de la Administración, decisión que responde a criterios de no renovación, como tampoco la conculcación del derecho de propiedad, toda vez que la renovación de la contrata –la cual tampoco está protegida por la confianza legítima- es una mera expectativa o esperanza, por lo que no existiendo el presupuesto básico para acoger la presente acción de protección, esto es, un acto arbitrario o ilegal, ésta deberá rechazarse.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20, de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación



y Fallo del recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, cuyo texto refundido se encuentra en el Acta Número 94, del año 2015, se resuelve:

Que, **SE RECHAZA**, el recurso de protección interpuesto por don Renato David Gómez Bascuñán, deducido en contra de la Universidad de Aysén, representada legalmente por su rector, don Enrique Urra Coloma, sin costas, por haber tenido motivo plausible para recurrir.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción de la Ministra Titular doña Natalia Marcela Rencoret Oliva.

Rol N° 365-2023 (Protección).



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: RBXPXNNXVMC

Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Coyhaique integrada por Ministro Presidente Pedro Alejandro Castro E. y los Ministros (as) Jose Ignacio Mora T., Natalia Rencoret O. Coyhaique, veintidos de abril de dos mil veinticuatro.

En Coyhaique, a veintidos de abril de dos mil veinticuatro, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: RBXPXNNXVMC